



Constancia secretarial

Señor Juez, el término de término de 20 días para resolver la impugnación vence el 11 de marzo de 2024 a las 5:00 p.m.

A su despacho señor juez.

Medellín, 11 de marzo de 2024

Antonio M. Navarro

Srio. Ad-hoc

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

Medellín, once de marzo de dos mil veinticuatro.

Proceso	ACCIÓN DE TUTELA Segunda instancia- Impugnación fallo.
Accionante	SILVIA INÉS CORREA DE CÁRDENAS
Accionada	COOSALUD EPS notificacioncoosaludeps@coosalud.com
Juzgado de 1ª Instancia	Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Medellín cmpl25med@cendoj.ramajudicial.gov.co
Juzgado de 2ª Instancia	Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín ccto01me@cendoj.ramajudicial.gov.co
Radicado	05001-40-03-025-2024-00064-00 (01 segunda instancia)
Sentencia	Confirma fallo

Se trata de emitir pronunciamiento con respecto a la impugnación que COOSALUD E.P.S. formuló frente al fallo del 30 de enero de 2024 dictado por el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Medellín, como definición de la primera instancia del trámite de tutela que le promovió la Sra. SILVIA INÉS CORREA CÁRDENAS y cuya parte resolutive determinó:

"4. FALLA

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales y prevalentes a la vida, salud, seguridad social e integridad física de la adulta mayor SILVIA INÉS CORREA DE CÁRDENAS (C.C 32.115.648) conculcados por COOSALUD EPS y TODO DROGAS S.A.S.

SEGUNDO: ORDENAR a COOSALUD EPS y al proveedor TODO DROGAS S.A.S que, en el término improrrogable de treinta y seis (36) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, garanticen a la señora SILVIA INÉS CORREA DE CÁRDENAS (C.C 32.115.648) la entrega de los medicamentos **ALFA CETOANALOGOS DE AMINOACIDOS** 630 MG 1800 PASTAS, TRATAMIENTO PARA 6 MESES ordenado el 04 de diciembre de 2023, y **POLIETILENGLICOL DE 400** MG ordenado desde el 07 de julio de 2023.

TERCERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional reclamado por la señora SILVIA INÉS CORREA DE CÁRDENAS (C.C 32.115.648) en contra de COOSALUD EPS y TODO DROGAS S.A.S por carencia actual de objeto de protección constitucional por hecho superado, en lo referente a los medicamentos DAPAGLIPOZINA 10MG/IU 180 PASTAS TRATAMIENTO PARA 180 DÍAS y ROSUVASTATINA CALCICA 40.0 MG.

CUARTO: ORDENAR a COOSALUD EPS suministrar el tratamiento integral que requiera la señora SILVIA INÉS CORREA DE CÁRDENAS (C.C 32.115.648) con ocasión de las patologías N189 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA, I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA, I10X HIPERTENSIÓN ESENCIAL, I120 ENFERMEDAD RENAL HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA RENAL y I250 CARDIOMIOPATÍA ISQUEMICA y H526 OTROS TRASTORNOS DE LA REFRACCION que la aquejan y dieron origen a la presente acción de tutela.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes el contenido de esta providencia en forma personal o por otro medio expedito conforme lo prevén los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991. **Advértase** acerca de la procedencia de la **IMPUGNACIÓN** de este fallo, la cual puede interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: ENVÍESE a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, si no fuere impugnada esta decisión (artículo 31 Decreto 2591 de 1991), y una vez retorne, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE
ANGÉLICA MARÍA TORRES LÓPEZ
Jueza"

ANTECEDENTES

Hechos, pretensiones y anexos:

Narra la Sra. SILVIA INÉS CORREA DE CÁRDENAS que tiene 79 años de edad, está afiliada a la EPS COOSALUD régimen subsidiado, padece hipotirodismo, enfermedad coronaria con implantación de marcapasos desde hace 4 años, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica en espera de trasplante, por lo que viene siendo valorada por especialista en nefrología consultas cada tres meses y el 4 de diciembre de 2023 su médicos, le ordenaron los medicamentos Alfa Cetoanalogos de aminoácidos, Dapaglifozina, Rosuvastatina cálcica y Poletilenoglicol de 400 mg, pero a la fecha de la demanda de tutela, 16 de enero de 2024, no le han sido entregados y ella no cuenta con empleo estable, no con recursos económicos para adquirirlos. Afirma que su enfermedad no tiene cura y debe ser tratada constantemente.

Pidió amparo para sus derechos a la dignidad, salud, integridad física y la vida, a fin de que se ha efectiva la entrega de las medicinas y se le brinde atención integral.

Trajo copias de:

- a) Cédula de ciudadanía
- b) Historia clínica
- c) Prescripción de medicamentos.
- d) Reclamación a la Superintendencia de Salud

2. Trámite procesal, respuesta de la parte accionada.

El Juzgado de primera instancia dio curso a la solicitud de tutela por auto en el que además vinculó de oficio a la IPS Todo Drogas.

Coosalud EPS contestó que efectivamente la actora es su afiliada y que se estaba gestionando la entrega de los medicamentos que serían traídos del Municipio de El Bagre. Se opuso a la atención integral porque es una orden impartida a las

EPS por la Ley 1751 de 2015 y para ordenarse debe verificarse que la EPS ha actuado con negligencia. Finalmente pidió negar las tutela y ser excluida del trámite.

3. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado del conocimiento decidió conforme a lo antes señalado, con fundamento en la jurisprudencia constitucional que analizó para arribar a las conclusiones que desataron el asunto.

4. Impugnación.

COOSALUD EPS pide revocatoria del fallo, pero única y exclusivamente de la concesión del tratamiento integral argumentando que no es posible mediante la acción de tutela amparar derechos que no han sido vulnerados o frente a los cuales no existe una amenaza real. Significa lo anterior que amparar hechos futuros e inciertos sobre los cuales no se ha presentado vulneración alguna, resultaría improcedente, por lo que no es posible conceder el tratamiento integral pues se estaría concediendo protección a derechos que no han sido vulnerados. Además no se probó negligencia o retardo injustificado.

5. Actuación surtida en la segunda instancia.

Conociendo de la impugnación aquí **no se consideró necesario** solicitar otros informes o la práctica de otras pruebas al tenor de lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2.591 de 1991. Así, se procede en la oportunidad que esa misma norma señala a decidir lo concerniente, lo que se hará con apoyo en estas...

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Aspectos Generales de la Acción de Tutela:

La ACCIÓN DE TUTELA consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, está instituida como un mecanismo adecuado para que todas las personas reclamen ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley, pues en ese sentido la acción de tutela no es una institución procesal alternativa ni supletiva. La protección correspondiente, como lo precisa el mandato superior, consiste en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de actuar, que se imparte en un fallo de inmediato cumplimiento, pese a que puede impugnarse ante el juez competente y que en últimas el expediente debe ser remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esto último dice que el recurso de impugnación que el fallo de tutela amerite y la eventual revisión, se surten en el efecto devolutivo.

Es también previsión de la norma constitucional citada, como ya está dicho, la que predica la subsidiariedad de la acción de tutela, cuando dice que sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Como se ha advertido, en su inciso final la norma superior también alude a la ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES, disponiendo que la ley determinaría los casos de su procedencia, enmarcados por las circunstancias de que los particulares accionados fueran prestadores de servicios públicos; que su

conducta afectara grave o directamente el interés colectivo; o que, respecto al sujeto pasivo particular, el solicitante se hallare en estado de subordinación o indefensión.

El desarrollo de la norma constitucional en el mencionado aparte, lo contiene el art. 42 del Decreto 2591 de 1991, que contiene este tenor en su encabezado y ord. 2°:

“PROCEDENCIA. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la **prestación del servicio público de salud**.”. (El texto original restante de este numeral de la norma, fue declarado inexecutable según sentencia C-134 del 17 de marzo de 1994 de la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional).

Aquí la accionada **es una E.P.S**, precisamente una entidad que se encarga de la prestación del servicio de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la actora su afiliada actora, por lo que es clara la legitimación en la causa en ambos extremos. En cuanto al principio de inmediatez, se estima satisfecho por lo que más adelante se indicará.

2. El problema jurídico.

De acuerdo con esos planteamientos le corresponde a este despacho definir en razón de la impugnación de que trata esta segunda instancia **si debió concederse o no el tratamiento integral otorgado en la primera instancia, pues las otras decisiones no fueron objeto de alzada.**

Para tal efecto se acudirá a la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional cuyas decisiones constituyen doctrina constitucional de obligatorio acatamiento, so pena de vulnerar la propia Ley Suprema, como lo advirtió esa máxima autoridad en cita según la cual “...resultaría inútil la función de revisar eventualmente los fallos de tutela si ello únicamente tuviera por objeto resolver la circunstancia particular del caso examinado, sin que el análisis jurídico constitucional repercutiera, con efectos unificadores e integradores y con algún poder vinculante, en el quehacer futuro de los jueces ante situaciones que por sus características respondan al paradigma de lo tratado por la Corte en el momento de establecer su doctrina.” (SENTENCIA T- 175 del 8 de abril de 1997)

3. La jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y el caso concreto.

Respecto del tratamiento integral la acción constitución que ocupa tiene por objeto garantizar al máximo las atenciones en salud de la paciente. Al efecto se tendrá en cuenta la **Sentencia T-062 de 2017**, de la cual se destacan los siguientes apartes:

“7. Principio de integralidad en la prestación de los servicios de salud, Reiteración de jurisprudencia.

Esta Corporación, en diversas oportunidades, se ha referido al principio de integralidad en materia de salud. Una de las perspectivas a través de las cuales se ha abordado el tema, es aquella relativa a la adopción de todas las medidas necesarias encaminadas a brindar un tratamiento que efectivamente mejore las condiciones de salud y calidad de vida de las personas.¹ Es decir, es obligación del Estado y de las entidades encargadas de la prestación del servicio, propender hacia *“la autorización total de los tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás que el paciente requiera con ocasión del cuidado de su patología y que sean*

¹ Sentencia T-408 de 2011.

*considerados como necesarios por el médico tratante*², como lo determinó también el artículo 8 de la Ley 1751 de 2015.

En ese orden, no se puede imponer obstáculo alguno para que el paciente acceda a todas aquellas prestaciones que el médico tratante considere que son las indicadas para combatir sus afecciones, de manera oportuna y completa.

Igualmente se tendrá en cuenta por este Juzgado de circuito la sentencia T-171 de 2018, que reiteró:

“3.3. Ley 1751 de 2015 – Ley Estatutaria de Salud

3.3.1. La categorización de la salud como derecho fundamental autónomo fue finalmente consagrado por el legislador en la Ley 1751 de 2015. Los desarrollos de la jurisprudencia constitucional en torno a la naturaleza y alcance de este derecho, fueron su principal sustento jurídico y sirvieron para establecer normativamente la obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para brindar a las personas acceso integral al servicio de salud; derecho que, de encontrarse de alguna manera amenazado, puede ser protegido por vía de acción de tutela.

3.3.2. Los artículos 1 y 2 de la ley estatutaria establecieron la naturaleza y el contenido del derecho a la salud y reconocieron, explícitamente, su doble connotación: primero (i) como derecho fundamental autónomo e irrenunciable, que comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación y la promoción de la salud; segundo, (ii) como servicio público esencial obligatorio cuya prestación eficiente, universal y solidaria se ejecuta bajo la indelegable responsabilidad del Estado.

3.3.3. Por su parte, el artículo 6 de la mencionada ley es el que mejor determina y estructura jurídicamente el contenido del derecho fundamental a la salud. En él se condensan las características que debe cumplir –tomadas de la Observación General No. 14 del CDESC–, así como los principios que estructuran su prestación como servicio público. Este artículo puntualiza los principios de universalidad, equidad, solidaridad, sostenibilidad, eficiencia y progresividad del derecho, entre otros, como definitorios del sistema de salud y agrega que éstos deben ser interpretados de manera armónica sin privilegiar alguno de ellos sobre los demás.

Principio de integralidad

3.3.4. Aunado a lo anterior, se destaca el principio de integralidad consagrado en el artículo 8°, que por su relevancia en la materialización efectiva del derecho a la salud, el Legislador dispuso su explicación en norma aparte. Este principio fue definido de la siguiente manera:

“Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario.

En los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada”.

3.3.5. En concordancia con lo señalado por la sentencia C-313 de 2014 que ejerció el control previo de constitucionalidad de la ley estatutaria, el mencionado principio de integralidad irradia el sistema de salud y determina su lógica de funcionamiento. La adopción de todas las medidas necesarias encaminadas a brindar un tratamiento que efectivamente mejore las condiciones de salud y calidad de vida de las personas es un principio que “está en consonancia con lo establecido en la Constitución y no riñe con lo sentado por este Tribunal en los varios pronunciamientos en que se ha estimado su vigor”.

² Sentencia T-408 de 2011.

3.3.6. Según el inciso segundo del artículo 8°, el principio de integralidad opera en el sistema de salud no solo para garantizar la prestación de los servicios y tecnologías necesarios para que la persona pueda superar las afectaciones que perturban sus condiciones físicas y mentales, sino, también, para que pueda sobrellevar la enfermedad manteniendo su integridad y dignidad personal. En ese sentido, la Corte ha señalado que el servicio “se debe encaminar a la protección constitucional del derecho fundamental a la salud, es decir que, a pesar del padecimiento y además de brindar el tratamiento integral adecuado, se debe propender a que el entorno [del paciente] sea tolerable y digno” .

3.3.7. El principio de integralidad de la Ley Estatutaria de Salud envuelve la obligación del Estado y de las entidades encargadas de la prestación del servicio de garantizar la autorización completa de los tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás servicios que el paciente requiera para el cuidado de su patología, así como para sobrellevar su enfermedad.”

En el caso concreto

La accionante pidió amparo para sus derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas en razón de que la EPS COOSALUD a la que está afiliada no le suministra una serie de medicamento prescritos por sus médicos, para el tratamiento de sus varios padecimientos de salud, lo cual dio lugar a que el Juez de primera instancia le otorgara el amparo y ordenara la entrega de los mismos y ordenara garantizar tratamiento integral. La impugnación ataca solamente el tratamiento integral concedido.

Al respecto estima este Despacho que según los diagnóstico que tiene la accionante, es evidente su necesidad de que se le hagan efectivas en la manera más rápida posible la ordenes médicas que se le prescriban para la atención y tratamiento de sus padecimientos, que como evidente y obvio requiere atenciones oportunas, continuas, so pena de graves complicaciones y afectaciones que para la salud y la vida del paciente puede significar su tratamiento tardío, discontinuo, etc. es decir que resulta indispensable que se le garantice su tratamiento integral y continuo y de manera que no tenga que acudir como en esta ocasión ocurrió, una y otra vez a la acción de tutela a fin de hacer valer los derechos a la salud, a la integridad física y a la vida digna, es decir sin que tenga que estar sometida a tener que estar acudiendo a los jueces constitucionales para hacer cumplir las prescripciones de los médicos tratantes por cuenta de su EPS para la atención efectiva de su diagnóstico.

Tal tratamiento integral para hacer determinable la orden que conlleva ha de referirse a la sintomatología y patologías diagnosticadas y que obviamente ha de atender esa determinación o especificación **a todo aquello que los médicos tratantes adscritos a la E.P.S. o pertenecientes a su red de prestadores de servicios médicos y que bajo su responsabilidad prescriban.**

Ha de anotarse además que el ordenarse la prestación de tratamiento integral a un paciente, no pone en desventaja a los otros usuarios del sistema de salud frente a él, porque sus peticiones de salud se tramitarían como su fueran urgentes. No es así, estima este Despacho, por la sencilla razón de que todos los usuarios de la salud tienen iguales derechos frente a la EPS y el Sistema General de Seguridad en Salud para el cual cotizan ineludiblemente, o del que son beneficiarios subsidiados dado su grado de pobreza, por lo que todos ellos hayan interpuesto acciones de tutela o no, tienen derecho en iguales condiciones a la efectiva y pronta prestación de los servicios en salud, resultando inadmisibles a todas luces las evasivas de la EPS o las dilaciones del servicio en el tiempo.

Es que además si bien es imposible antelar que en lo futuro la E.P.S habrá o no de incurrir en otras vulneraciones o amenazas de los derechos a la salud de la parte actora, nada impide que se le recuerde y ordene a la entidad accionada que **el tratamiento que debe prestar a su paciente debe ser integral, completo y continuo**, no solo porque así lo dispone la jurisprudencia constitucional, sino también porque de esa forma lo ordenaba la ley 100 de 1993 y de manera reiterativa por cierto a lo largo de su articulado, la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de Salud, la Resolución 6408 de 2016 y hoy la Resolución 5269 de 2017 art. 3 numeral 1 del Ministerio de Salud y Protección Social.

III.- DE LA DECISIÓN PROCEDENTE.

Por lo expuesto el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, adopta la siguiente

DECISIÓN:

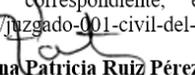
- 1) **CONFIRMAR** la sentencia de tutela del 30 de enero de 2024 que amparó los derechos invocados por la paciente SILVIA INES CORREA frente a la EPS COOSALUD
- 1) **DISPONER** que esta decisión se notifique a las partes y al juzgado del conocimiento por correo electrónico institucional.
- 2) **DISPONER** que en el término de los diez (10) días siguientes al de ejecutoria del fallo de segunda instancia, se envíe el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUEZ**

JOSÉ ALEJANDRO GÓMEZ OROZCO

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN

En la fecha, digitalmente generada, se notifica la providencia precedente, PERSONALMENTE con su remisión (Ley 2213 de 2022) o por ESTADOS ELECTRÓNICOS (C.G.P.), cuyo número de estado y contenido de la actuación, inclusive para efectos de constatar su autenticidad, hallará alojado en el Micrositio asignado a este Juzgado por la Rama Judicial, en la fecha y con el radicado correspondiente, en la siguiente dirección: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-001-civil-del-circuito-de-medellin/105>.


Adriana Patricia Ruiz Pérez
Secretaria

Ant.